

EXPEDIENTE GUBERNATIVO 66/ 2025.

PONENTE: Marina Mas Carrillo

Habiendo sido designada ponente por Acuerdo de 24 de febrero de 2025 de la Presidencia del TSJ^a de Canarias, para emitir propuesta de resolución en trámite de informe en recurso de alzada ante el CGPJ, formulo la siguiente:

PROPUESTA DE INFORME

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el artículo 70.3 del mismo texto legal, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emite el siguiente informe en relación con el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Manuel Hermo Costoya, frente a los acuerdos de esta Sala de fecha 29 de noviembre de 2024 (380/2024) y 17 de enero de 2025 (12/2025), ambos en expediente gubernativo 54/2024, recurso de alzada registrado por el CGPJ como 55/2025.

I. Por Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 27 de septiembre de 2023, BOE 12 de octubre de 2023, se culmina la separación de jurisdicciones en el partido judicial de Telde, acordada por RD 1218/2011, de 5 de septiembre. En este acuerdo se establecen normas de distribución de asuntos. Entre estas normas se destaca la que sigue :

“1. Cada juzgado de instrucción conservará los procedimientos civiles que se encuentren en fase de ejecución y que tengan pendiente de resolución algún incidente hasta la resolución firme del incidente. Tras ello, el asunto permanecerá física y materialmente en el juzgado ante el que se encuentra pendiente. Cuando se presente solicitud de inicio o continuación de la ejecución o se deba acordar de oficio, remitirá el asunto con los autos, en su integridad, al Decanato para que sea repartido a los juzgados de primera instancia de acuerdo con las normas de reparto.”

II.-Por **Acuerdo 71/2024, expediente gubernativo 54/2024**, se resolvió en reunión del Pleno de la Sala de Gobierno de **8 de marzo de 2024**, consulta de la Junta General de Jueces de Telde, sobre interpretación y aplicación del Acuerdo de 27 de septiembre de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ, conforme al que se consideró por esta Sala de Gobierno, que dicha interpretación y aplicación correspondía a la Decana del partido conforme al art. 86.d Reglamento 1/2000, que asigna a dicho cargo la función de resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones, que se planteen en materia de reparto, siendo sus decisiones recurribles.

No obstante, se facilitaban por la Sala los criterios seguidos en otros partidos con separación de jurisdicciones a modo orientativo, siendo éstos criterios los que siguen:

.-Se entiende por incidente toda incidencia procesal que requiera o exija un pronunciamiento expreso y diferenciado de la tramitación ordinaria del procedimiento por el Juez o por el LAJ, tales como: oposición a la ejecución, liquidación de daños y perjuicios, de intereses, tasación de costas, tercerías, liquidación del régimen económico matrimonial que se solicite por el cónyuge no deudor,

impugnación de la resolución del beneficio de justicia gratuita, reclamación de honorarios de abogado del art. 35 LEC, reclamación de provisión de fondos o de la cuenta de derechos y suplidos del procurador (29 y 34 LEC), incidentes vulnerabilidad de las partes, sustitución o sucesión procesal, abstenciones, recusaciones, solicitud de suspensión del procedimiento, revisión de cláusulas abusivas, nulidad de actuaciones...

.-Se entiende que el momento procesal en el que surge el incidente, que debe ser resuelto antes de remitir el expediente a los Juzgados de 1ª Instancia, es el que corresponde a la fecha de entrada del escrito que da inicio al incidente. De este modo, si es anterior a 27 de septiembre de 2023, fecha del Acuerdo del CGPJ, el Juzgado de Instrucción debe continuar la tramitación hasta la firmeza de la resolución, permaneciendo en el Juzgado hasta que se presente escrito de continuación de la ejecución, momento en el que será remitida a Decanato para su reparto.

III.- Por Acuerdo 380/2024, expediente gubernativo 54/2024, adoptado en reunión del Pleno de la Sala de Gobierno de **29 de noviembre de 2024**, sobre acuerdo adoptado por la misma Junta de Jueces de Telde de 30 de septiembre de 2024, en la que se establecían normas de reparto, unos criterios de interpretación relativos a las ejecuciones remitidas por los Juzgados de Instrucción y solicitud de refuerzo de funcionarios para tramitación de las mismas, se dispuso por esta Sala, tras constatar las discrepancias existentes entre los magistrados de Instrucción y de 1ª Instancia sobre la competencia para conocer de las ejecuciones, que por el Decanato se procediera de inmediato al reparto y entrega de los procedimientos civiles remitidos por los Juzgados de instrucción, sin perjuicio de que el Juzgado de 1ª Instancia receptor del procedimiento pudiera plantear cuestión de competencia conforme dispone el art. 168. 2 a) LOPJ ante la Decana, indicando además que contra esta decisión cabría interponer recurso de alzada ante el CGPJ, lo que se haría saber en el pie de cada acuerdo en el que se resolviera recurso gubernativo.

Ante la sobrecarga de trabajo de los Juzgados de 1ª Instancia por la asunción de estos procedimientos de ejecución, se informaba favorablemente el nombramiento de funcionarios de refuerzo, lo que se concretaba en el de al menos un gestor por cada dos Juzgados.

IV.- Por Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 17 de enero de 2025 (12/2025), expediente gubernativo 54/2024, que resolvía complemento o aclaración del anterior de 29 de noviembre de 2024, instada por el magistrado recurrente en alzada D. Juan Manuel Hermo Costoya, se acordó:

1º.- Aprobar la norma de reparto que obra en el acuerdo de 30 de septiembre de 2024 de la Junta General de Jueces de Telde como complemento al anterior dictado el 29 de noviembre de 2024, aunque excluyendo la mención de la obligación de que el Juzgado de instrucción indique el tipo de ejecución que remite a Decanato, quedando al auto de inhibición del Juzgado remitente el identificar el procedimiento cuya ejecución remite para reparto, en orden a facilitar el mismo.

2º.-No aprobar la fijación de criterios de interpretación para la aplicación del acuerdo de 27 de septiembre de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ y de las normas de reparto relativas al mismo, debiendo estarse al acuerdo adoptado en reunión del Pleno de la Sala de Gobierno de 29 de noviembre de 2024, sobre el mismo acuerdo de la Junta de Jueces de 30 de septiembre de 2024, en el que se consideró que dicha interpretación y aplicación corresponde a la decana del partido

conforme al art. 86.d ROGT, que asigna a dicho cargo la función de resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones planteadas en materia de reparto, siendo sus decisiones recurribles, en la forma expuesta en aquel acuerdo.

3º.- La Juez decana de los juzgados de Telde deberá poner en conocimiento de la Sala de Gobierno en el plazo de cinco días cuántas cuestiones de competencia han sido planteadas por los Juzgados de primera instancia contra el acuerdo de reparto de cada una de las ejecuciones civiles remitidas por los Juzgados de Instrucción desde el 27 de septiembre de 2023, y cuántas están pendientes de resolución.

V.- Por **Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 18 de febrero de 2025**, se ha solicitado “un pronunciamiento expreso sobre la aprobación de las normas de reparto judicial de Telde y sus criterios interpretativos adoptados en Junta General de los Juzgados de Telde de 30 de septiembre de 2024”.

VI.- El **19 de febrero de 2025**, D. Juan Manuel Hermo Costoya, magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia n.º 6 de Telde presenta **recurso de alzada ante el CGPJ contra el acuerdo 380/2024, dictado el 29 de noviembre de 2024**, completado por acuerdo **12/2025 de 17 de enero de 2025**.

En su escrito de recurso, explica que tras haber solicitado de la Sala de Gobierno en un primer momento, que aclarase cómo debía interpretarse el punto primero del acuerdo, contestando esta Sala de Gobierno, que correspondía a la Sra. Decana la interpretación de las normas de reparto, pero persistiendo los problemas derivados del mismo, se acordó en Junta de Jueces de 30 de septiembre de 2024, establecer con carácter vinculante los criterios de interpretación precisos para la aplicación del citado acuerdo, y de las normas de reparto relativas al mismo asunto. La motivación, explica, era la vulneración “de forma flagrante, reiterada y arbitraria por la Sra. Decana el acuerdo de la Comisión”, obligando a los magistrados de 1ª instancia a presentar cuestiones de competencia, que rechazadas en su totalidad, obligan a recurrir el acuerdo de la Juez Decana ante el CGPJ. Además, señala que se están llevando a cabo inhibiciones de oficio, sin la existencia de ningún escrito de iniciación ni continuación, ni debiendo continuar de oficio, incluso con escritos pendientes de proveer o incidentes sin resolver anteriores a la fecha de entrada en vigor del convenio.

Cita los artículos 170 LOPJ y 65. c) y e) Reglamento 1/2000, que entiende amparan que por la Junta de Jueces se fijen normas gubernativas sobre asuntos comunes al partido, que afectan a todos los órganos jurisdiccionales presentes en la Junta de Jueces donde fueran adoptadas, pese a que dice que: “ al entender de quien recurre resulta evidente que es a la Sra Decana a quien le corresponde interpretar las normas de reparto....ello no le permite hacerlo siguiendo su interpretación personalísima, con criterios injustos o arbitrarios, y que no garantizan ni la igualdad ni el correcto reparto de asuntos entre los órganos del partido”.

Por ello solicita la revocación parcial del acuerdo 380/2024 adoptado por la Sala de Gobierno del TSJª de Canarias, en su sesión celebrada el 29 de noviembre de 2024, y que fue completado por acuerdo 12/2025, adoptado en sesión de 17 de enero de 2025, y se aprueben con carácter vinculante, los criterios de interpretación que, en Junta de Jueces, bajo la Presidencia de la Dra. Decana han sido aprobadas para este partido judicial de Telde.

Conforme a lo expuesto, resulta que el objeto del recurso de alzada se limita en su impugnación de los acuerdos de esta Sala antes citados, a la no aprobación de los criterios de interpretación precisos para la aplicación del Acuerdo de 27 de septiembre de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ, y de las normas de reparto relativas al mismo, adoptados conforme el Acuerdo de la Junta de jueces de Telde de 30 de septiembre de 2024, no a los otros dos puntos del acuerdo (normas de reparto y requerimiento a la Juez Decana).

Tras examinar los preceptos de aplicación, las consideraciones jurídicas vertidas en los acuerdos recurridos se mantienen.

El art. 170 LOPJ, versión vigente a la fecha de aprobación de Acuerdo de la Junta de Jueces de Telde, en su primer párrafo establece que:

“1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podrán reunirse en Junta, bajo la presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquél les solicitare informe”

Similar a la actual modificada por Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero:

“1. Podrán reunirse en Junta de Sección del Tribunal de Instancia los jueces, juezas, magistrados y magistradas que pertenezcan a la misma Sección de un Tribunal de Instancia.

Esta Junta, presidida por quien ejerza la Presidencia de la Sección respectiva, se reunirá para proponer las normas de reparto entre los jueces, juezas, magistrados y magistradas, unificar criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquél les solicitare informe.”

No resulta de este precepto la competencia de la Junta general pero tampoco de la sectorial, para la fijación de criterios interpretativos relativos a la aplicación de las normas de reparto. Es el decano quien tiene la función de *“supervisar el reparto de asuntos entre los Juzgados de la población, asistido de un Secretario, y resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan”* (art. 86.d ROGT).

El acuerdo de 27 de septiembre de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ sobre la separación de jurisdicciones en el partido judicial de Telde, en su acuerdo segundo dispone aprobar para culminar de forma efectiva la separación de jurisdicciones unas normas de distribución, siendo la norma tercera la que sigue:

“3. Las correspondientes juntas de jueces y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán las normas de reparto de asuntos, en lo que fuera necesario, a las presentes normas”

Se refiere a normas de reparto pero no a criterios de interpretación.

-El Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de Tribunales, en su art. 65 atribuye a las Juntas Sectoriales la competencia para:

“c) Tratar de unificar criterios en cuestiones jurídicas comunes o generales, con estricto respeto a la independencia judicial de cada uno de sus miembros en materias jurisdiccionales.”

“e) Tratar de asuntos comunes que afecten a los Juzgados del orden jurisdiccional reunido en Junta.”

No tiene cabida en dichos supuestos la fijación de criterios interpretativos para aplicación de las normas de reparto, que como se ha dicho corresponde al Juez Decano conforme al art. 86.d ROGT .

Conclusión

El recurso de alzada presentado por D. Juan Manuel Hermo Costoya debe ser desestimado al no ser competencia de la Junta de Jueces Sectorial fijar criterios de interpretación para la aplicación del Acuerdo de 27 de septiembre de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ y de las normas de reparto relativas al mismo, al ser la Juez Decana del partido judicial de Telde, quien ostenta la competencia en materia de reparto y quien deberá en su ejercicio hacer aplicación de las normas de distribución que resultan del citado Acuerdo.

En Las Palmas de Gran Canaria a 10 de marzo de 2025.

Marina Mas Carrillo, Magistrada Juzgado de lo Social n.º 11 LPGC.